



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

CAUSA N°23267/2021

Sentencia Definitiva

**AUTOS: EMPRESA SAN VICENTE S.A.DE TRANSPORTE c/ ADMINISTRACION
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA**

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excelentísima Cámara Federal de la Seguridad Social para dictar sentencia en estos autos, se procede a votar en el siguiente orden:

EL DOCTOR JUAN FANTINI ALBARENQUE DIJO:

EMPRESA SAN VICENTE S.A DE TRANSPORTE apela la Resolución 8 2021-1932 E-AFIP-DEIMPR#SDGTLSS que no hace lugar a la presentación interpuesta y confirma la deuda determinada periodo 11/2009 a 10/2013 y 11/2014 a 10/2016 y acta de infracción periodo 11/2009 a 02/2010, por la aplicación del Decreto 814/2001.

La recurrente no efectúa el depósito previo de las sumas cuestionadas, (conf. lo dispuesto por el artículo 15 de la ley 18820). Alega imposibilidad de afrontar su pago. Adjunta Balances para demostrarlo, y señala que aun utilizando la totalidad de los saldos de caja y dejando sin disponibilidad de efectivo a la empresa habría alcanzado para afrontar el pago previo de los montos ajustados.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, admitió en reiteradas oportunidades la validez constitucional de la exigencia del pago previo de la deuda determinada por la autoridad administrativa como requisito previo a la intervención judicial (cf. doctrina de Fallos 155:96; 162:263; 235:479; 238:418; 296:57; etc.). Sólo justificó apartarse de la imposición legal, en casos de monto excepcional, en que el requisito en cuestión pudiera constituir un obstáculo insalvable para la revisión de la pena por los tribunales de justicia, fundándose en el derecho de defensa del art. 18 de la Constitución Nacional (sea porque ese pago generaría un importante desapoderamiento - Fallos, 247:181 ; 205:208 y su cita-, sea por la falta comprobada e inculpable de los medios para afrontarlo -Fallos, 256:38; 261:101-, sea porque se revele un inmediato e inequívoco propósito persecutorio o desviación de poder (Fallos 288:287; 308:381).

Atento la envergadura del monto en cuestión superior a los ciento setenta millones de pesos y constancias de autos, se propicia habilitar la instancia y proceder a analizar el recurso impetrado.

Señala la recurrente que el organismo fiscal considera erróneamente que debería encuadrarse en el inc. a) del artículo 2 del Decreto 814/01, aplicando una alícuota del 21% en lugar de la alícuota del 17%, al tomar en cuenta el tope de facturación de \$48.000.000 que menciona el Decreto 1009/01, como la R.G.N°1095.

Realiza una disquisición en torno de que se equiparan el sector servicios y el sector comercio. Refiere diversos precedentes jurisprudenciales en apoyo de su postura y sostiene que los decretos 814/2001, 1009/21 y RG(AFIP) 1095 deben integrarse con la Resolución 24

Fecha de firma: 08/05/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#36049073#331168816#20230505124950649



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

/2021 de la SEPyME y sus modificatorias, para evaluar si a una empresa le corresponde tributar la alícuota del 21 % o del 17% en concepto de contribución de seguridad social.

Menciona en tal sentido las sucesivas normas dictadas, Resoluciones N° 675/02, 147/06, 21/10, 50/13, 367/2015, 11/16, 103E/17, 154/18, 220/2019 y manifiesta que los montos de ventas netas en promedio no exceden en ninguno de los periodos pretensos de ajuste los topes mencionados, por lo que no procede el requerimiento de rectificar las declaraciones juradas (F931) en cuanto a las contribuciones destinadas al Sistema Único de la Seguridad Social.

Destaca que aun actualizando el monto originario previsto por el Decreto 814/2001 conforme el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) según cuadro que acompaña, tampoco excede los mismos.

Cuestiona asimismo, la multa e intereses aplicados.

A efecto de centrar el tema en debate, es importante destacar lo que se expone en la contestación de agravios y en el dictamen jurídico N° 214/2021 (DV REVA), fundamento de la resolución que se cuestiona.

En principio se referencia el criterio de la administración en cuanto a que el límite de \$48.000.000 es la definición de PyME adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) mediante el Decreto N° 1009/01 a los efectos de la aplicación de su similar N° 814/01 y, en virtud de ello, todo empleador encuadrado en los sectores "servicios" o "comercio" cuyas ventas totales anuales superen los \$48.000.000 debe tributar conforme a la alícuota del 21%.

Sostiene la administración, que mientras el Decreto N° 814/01 fija las alícuotas de contribuciones patronales, el Decreto N° 1009/01 reglamenta esa disposición (estableciendo los requisitos de aplicación y remitiendo a la Resolución SPyME N° 24/01 sólo para definir los sectores abarcados y la forma de cálculo de sus ventas totales anuales); mientras que la Resolución General N° 1095/01 recepta ambos decretos a fin de reglar la conducta que deben adoptar los contribuyentes ante el Organismo para el ingreso de las contribuciones.

Señala que las Leyes N° 24.467 y N° 25.300 son las que establecen, respectivamente, el marco regulatorio y de fomento de las PyMEs. Sin embargo, ninguna de ellas define el concepto de PyME, limitándose a encomendar esa tarea a la autoridad de aplicación.

Afirma que el concepto de PyME "a los efectos la determinación de la alícuota de contribuciones patronales" es el que surge del Decreto N° 1009/01. No existe un concepto único de PyME que defina a dichas unidades productivas sino que hay que considerar a cada uno de los regímenes vigentes, siendo el límite de \$48.000.000 la definición de PyME adoptada por el PEN en el Decreto N° 1009/01 para la aplicación del Decreto N° 814/01.

Indica que el Decreto N° 1009/01 -artículo 1- reglamenta las condiciones de aplicación del Decreto N° 814/01 -artículo 2-, las que no pueden ser modificadas sino por las disposiciones de una norma que ostente al menos, la misma jerarquía; por ende, el tope de \$48.000.000 fijado por el artículo 1 del Decreto N° 1009/01 podría ser modificado por el PEN





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

mediante la emisión de un nuevo Decreto, pero se mantiene inalterable ante el dictado de normas de jerarquía inferior, como son las dictadas por la SPyME.

En síntesis, salvo en lo que es materia de remisión expresa -que en relación al monto de \$48.000.000 no acontece-, el Decreto N° 1009/01 no resulta alcanzado por las modificaciones introducidas a la Resolución SPyME N° 24/01 por la Resolución N° 675/02 y la Disposición N° 147/06, manteniéndose incólume el importe allí establecido hasta tanto sea modificado por el PEN.

Ahora bien, en el Dictamen Jurídico N° 214/2021(DV REVA) se realizan ciertas precisiones que es oportuno reproducir en su parte pertinente.

Se señala con remisión al Informe Final de Inspección lo siguiente “Debido a que algunos fallos de la Cámara Federal de la Seguridad Social, ante reclamos de contribuyentes intimados por encuadrarse incorrectamente en el Decreto 814, indican que a estos casos debería haberse aplicado la legislación positiva vigente incluyendo la Resolución 675/02 (SEPyME)... es que esta instancia ha seleccionado... aquellos casos de empresas que han superado en varios periodos, con sus promedios de venta los montos determinados por la resolución 675/02 y posteriores actualizaciones de la SEPyME que determinan los límites para comprender a una empresa en la categoría de “pequeña y mediana” , sector que el legislador tuvo en miras al sancionar la normativa original”

“Se confecciono papel de trabajo (F. 265) consultado el sistema Informático e- Fisco- Resumen DDDJJ Ganancias (Fs. 266/7) y los balances presentados por el contribuyente a fin de constatar las ventas netas declaradas por los periodos bajo fiscalización, los promedios calculados en función de las mismas y los montos SEPyME correspondientes a cada periodo” continuo cuadro.

“Se elevó a consulta de la Superioridad y se estableció que el monto fijado por el decreto N° 1009/01 no ha sido modificado, manteniendo el criterio de quien supere el tope de \$48.000.000 de las ventas anuales deberá tributar en el inc.a) del Dto. 814/01 criterio que sostiene el organismo, sin embargo en atención a que esa cuestión es impugnabile por los contribuyentes en atención a las posturas que poseen las salas de CFSS, se resuelve en caso donde las ventas si bien superan los \$ 48.000.000 y no superan el tope establecido por SEPyME no proceder a reclamar su ajuste, no implicando desconocer una cuestión de derecho sino que el organismo busca evitar causas litigiosas...”

“En función de la verificación realizada mediante base e-Fisco y los Estados Contables ...esta fiscalización teniendo en cuenta lo ordenado por la superioridad que, sin desconocer el criterio del organismo, antepone evitar litigiosidad y considerando el criterio de las actualizaciones de la SEPyME, determinó teniendo en cuenta el mes de cierre del ejercicio del contribuyente (junio) surge inconsistencias en los periodos 11/2009 a 10/2013 y 11/2014 a 10/2016).

Fecha de firma: 08/05/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#36049073#331168816#20230505124950649



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Continúa el Dictamen jurídico, señalando que “... de acuerdo con lo referido en el informa de inspección y contrariamente a lo afirmado por la firma del asunto, el promedio de sus ventas- en el periodo que origina el ajuste- ha superado los topes incluso trazados por la normativa dictada por la SPyME –SERVICIOS.- conforme actividad declarada ante este organismo- para catalogar como pequeña y mediana empresa”

Refiere que la actividad principal de la quejosa es Servicios de Transporte automotor urbano y suburbano regular de pasajeros y que no posee actividad secundaria, por ello no se entienden los motivos por los cuales nuevamente insiste en que se le apliquen normas dictadas por la SEPyme vinculadas a COMERCIO.

De lo hasta aquí expuesto, resulta un enfoque diferente del organismo para la determinación de la deuda en estos actuados, el cual, no se acota ya al tope de \$48.000.000 sino que recepta los incrementos de las Resoluciones SEPyme pero referido a la actividad SERVICIOS, actividad principal de la actora.

Sin perjuicio de lo que más adelante se señala respecto de la aplicación del Decreto 814/2001, esta distinción no es procedente a los efectos de la considerar el encuadramiento de una empresa en una u otra alícuota del mencionado decreto

El propio organismo ha señalado reiteradamente que a tales efectos no cabe hacer la distinción entre SERVICIOS Y COMERCIO. Sostiene que el Decreto N° 1009/01 abarca, indistintamente, a los empleadores cuya actividad principal sea “comercio” o “servicios” -y les aplica la misma alícuota-; y que, sin embargo, el importe de \$48.000.000 en cuestión sólo coincide en su valor con el establecido originariamente por la Resolución N° SPyme N° 24/01 para la actividad “comercio” pero no para el rubro “servicios” -\$12.000.000

Manifiesta que “de ello resulta que una empresa que es considerada PyME desde la óptica productiva, no lo sea a los fines del Decreto N° 814/01, y a la inversa, que una empresa que, como unidad económica, no ostente esa calidad, sí lo haga a los fines del Decreto N° 814/01 -por ejemplo, empresa de servicios con ventas totales anuales de \$30.000.000-. Esta última empresa no se encontraría alcanzada por el tratamiento diferencial que otorgan las Leyes N° 24.467 y N° 25.300 a las PyMES en su acepción económica, pero sí por el alícuota preferencial del 17% referida en el inciso b) del Decreto N° 814/01 para las PyMES en su acepción tributaria.

En definitiva la postura ha sido imponer el límite de \$48.000.000 para la definición PyME adoptada por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) mediante el Decreto N° 1009/01 comprensivo de todo empleador encuadrado en los sectores "servicios" o "comercio" sin distinción.

El organismo unifica SERVICIOS y COMERCIO cuando se trata de la aplicación del Decreto 814/2001, por lo que no cabe adoptar una postura diversa cuando se analiza la incidencia de las Resoluciones de SEPyme, debiendo adoptarse siempre la mayor – COMERCIO.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

El beneficio de reducción de porcentaje de contribuciones patronales derivados del Decreto 814/01 se complementa con el Decreto 1009/01 que estableció la definición de PyMES, por remisión a la Resolución N° 24/2001, que a través de su art. 1° dispuso que serían consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas cuyas ventas totales expresadas en pesos no superen los valores por ella establecidos. Dichos montos, a posteriori, fueron actualizados en virtud de la Resolución 675/02 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.

A su vez, por ej. la Resolución 21/2010, en su artículo 1, señala a los efectos los importes de ventas para establecer como serán consideradas Micro Pequeñas y Medianas Empresas, un cuadro por sector. Situación que se reitera en las sucesivas Resoluciones dictadas.

En tanto el fundamento para elevar el tope fue la devaluación acaecida en nuestro país en diciembre de 2001, como es de público conocimiento, surge que el organismo actuante debió actualizar la R.G. 1095 en similar medida para adecuarla a una nueva definición cuantitativa de PyME pero no invocar una norma desactualizada para quitar el beneficio a empresas encuadradas como PyMES en la actividad comercial. Situación que por otra parte se continúa en sucesivos periodos posteriores.

En virtud de lo anterior, entiendo que el encuadramiento como PyME quedará esclarecido si la facturación arroja un monto inferior al límite fijado por las Resoluciones 675/2002, 147/2006; 21/2010; 50/2013 , 357/2015 , 11/2016 ,103/2017,154/2018 220/2019 y mod, que correspondan al periodo de cargo y con ello la tipificación de su situación para encontrarse alcanzada por el beneficio de reducción de contribuciones patronales derivado del Decreto 814/2001, art. 2 inc. b., debiendo utilizarse como parámetro el mayor valor COMERCIO, por las consideraciones ya efectuadas.

Lo antes expresado viene a coincidir con el criterio adoptado por la jurisprudencia de esta Cámara (ver Sala III SD.125.281 del 11/05/09 “Codimat SA c/AFIP-DGI s/Impugnación de deuda” y dictamen N° 25486/09 del Sr. Representante del Ministerio Público a cargo de la Fiscalía N° 2)

Cabe señalar que el Decreto 814/2001 fue reformado por la ley 27430. Asimismo, la Ley 27541 vigente desde el 23 de diciembre de 2019 introdujo una serie de modificaciones con respecto al cálculo y liquidación de las contribuciones patronales mediante la derogación del Dto. 814/01, Dto. 1009/01 y el Art. 173 de la Ley 27430.

En consecuencia, el análisis efectuado en estos actuados se acota al periodo de cargo. Revocándose la resolución recurrida en los términos indicados.

Así lo señalado, es abstracto pronunciarse sobre el resto de los agravios.

En atención al modo como se resuelve, y ponderando que el organismo en el caso de autos, ha evaluado como queda dicho las resoluciones de la SEPyME , aunque con un criterio acotado a SERVICIOS, considero que la cuestión amerita la declaración de las costas en el





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

orden causado, toda vez que las particulares circunstancias del caso bajo examen pudieron hacer creer razonablemente a la accionada que ostentaba suficiente derecho para litigar. (art. 68, 2º párrafo del C.P.C.C.N.)

Con respecto a la regulación de honorarios que imponen los artículos 163 y 164 del CPCCN cabe tener presente que la Ley 27.423 no puede ser aplicada en autos en forma mecánica dado que dicho texto legal no contempla expresamente el proceso de impugnación de deuda. Ello así y teniendo presente lo expresado por el Superior Tribunal de la Nación en cuanto a que la regulación de honorarios no debe depender exclusivamente del monto del reclamo sino que deberá ser ponderado por los jueces, bajo pautas de razonabilidad, atendiendo a la naturaleza, complejidad del asunto, mérito de la causa, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado (Fallos 257:142; 296:126; 302:534 y sus citas, 320:495; 339:216 entre otros) y lo dispuesto por el artículo 1255 del Código Civil y Comercial de la Nación y lo establecido por el Alto Tribunal en Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/Misiones, Provincia de s/ acción, declarativa. Sent. Del 4 de septiembre de 2018) se regulan los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora en 250 UMA, equivalente a \$ 3.733.250 (valor UMA \$ 14.933 conf. Acordada 9/2023.).

Por lo señalado, propicio: Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado. Imponer las costas en el orden causado, regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en 250 UMA, equivalente a \$ 3.733.250 (valor UMA \$ 14.933 conf. Acordada 9/2023., importe al que se adicionará el IVA en caso de corresponder. (cfr. Excma. C.S.J.N. en el fallo, “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación “sent. Del 16.06.03, Fallos 316,1533). Con respecto a los honorarios correspondientes a la dirección letrada de la parte demandada deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 2º de la ley 27.423.

EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:

Adhiero al voto del Dr. Fantini.

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO DIJO:

Disiento con el voto de mis distinguidos colegas de Sala.

En autos EMPRESA SAN VICENTE S.A. DE TRANSPORTE cuestiona la Resolución Administrativa 1932-E-2021 del 04/10/2021 en cuanto le reclama el pago de diferencias por lo que considera una errónea aplicación de la alícuota del 17% para el cálculo de las contribuciones patronales previstas en el inciso b) del artículo 2do del Decreto 814/2001 en lugar de aplicar el inciso a) de la mencionada norma, atento a que las ganancias obtenidas, según sostiene el organismo fiscal, habrían superado el límite de ventas previsto por el decreto 1009/01 durante los periodos 11/2009 a 10/2013 y 11/2014 a 10/2016. El reclamo efectuado es por \$ 40.415.302,91 en concepto de capital, \$ 92.418.658,61 por





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

intereses y una multa de \$ 26.310.542,99 y \$503.036,20 totalizando un reclamo de \$ 159.647.540,71.

Ante la exigencia impuesta por el artículo 15 de la ley 18.820, a fin de posibilitar la apertura de la presente instancia judicial, la impugnante refiere imposibilidad efectiva de dar cumplimiento a dicho pago por lo elevado del monto reclamado frente a su concreta capacidad económica. Acompaña balances correspondientes a los ejercicios cerrados al 30.06.2020, 30.06.2019 y 30.06.2018, a fin de acreditar sus dichos y manifiesta que aun utilizando la disponibilidad de caja con que cuenta, no podría afrontar el pago del depósito previo.

Entiendo prudente habilitar la presente instancia dado el importante monto que se reclama y que, en principio, su pago comprometería seriamente los recursos financieros de la apelante. La solución contraria podría importar una lesión a la garantía constitucional de la defensa en juicio (art. 18 CN).

Lo anterior responde al criterio amplio propiciado en la materia por la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de evitar que el pago impuesto por el legislador importe un real menoscabo a garantías constitucionales (ver CSJN sent. del 14/05/95 “Sanatorio Otamendi y Miroli” DT 1996-A-319; ídem. sent. del 11/06/98 “Cadesu c/DGI” y “Pandolfi c/DGI” pub. LL 25/02/2010 N° 1143636 entre otros).

En su memorial de agravios la parte actora relata que su actividad principal es el transporte urbanos y suburbanos de pasajeros. Según explica, el criterio seguido por EMPRESA SAN VICENTE SA para la liquidación de las contribuciones no es en modo alguno antojadizo, sino que se desprende de una interpretación razonable de la normativa vigente, pues en los considerandos del decreto 1009/2001 se establece que debe tenerse presente que de acuerdo a lo dispuesto en el mismo inciso a. del citado artículo 2° del decreto 814/2001 modificado por la ley 25.453, quedan excluidos de sus disposiciones aquellos empleadores cuya actividad económica encuadre en las disposiciones de la ley 24.476 y que resulta procedente aplicar a tales fines las disposiciones de la resolución de la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía N° 24 y su modificatoria. Recuerda que el objetivo primario del Decreto 814/01 es brindar un beneficio fiscal a las PyMES disminuyendo la presión fiscal y fomentar la generación de empleo. A su juicio la conducta asumida por el organismo al determinar la deuda que reclama parte de una interpretación caprichosa al establecer un monto fijo sin actualización, sin tener en cuenta las particularidades de la economía argentina.

Así, su parte liquidó las contribuciones patronales según pautas cuantitativas de facturación anual establecidas por diversas resoluciones que sucedieron a la original

Fecha de firma: 08/05/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#36049073#331168816#20230505124950649



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Resolución N° 24/01 (SEPyME) actualizándola, como la Res. 675/2002 SEPYME, Disposición 147/2006 SEPYME, Res. 21/2010 SEPYME, Res. 50/2013 SEPYME, Res. 357/2015 SEPYME, Res. 11/2016 SEPYME, 103-E/2017, 220/2019, 563/2019, 69/2020, que deberían haber sido tenidas en cuenta a efectos de subsumir la situación de EMPRESA SAN VICENTE SA DE TRANSPORTES en las mismas a efecto de quedar comprendida en el beneficio de reducción de contribuciones patronales conforme lo prevé el decreto 814/2001 artículo 2° inciso b.

Explica que los decretos 814/01 y 1009/01 no consagran la estática de los topes para acceder al beneficio de reducción de alícuotas, en cuanto al valor de ventas anuales. Ello toda vez que la circunstancia que la Resolución 1095/01 de AFIP mencione el importe desactualizado, no resulta óbice para que el beneficio se extienda a partir de la vigencia de las citadas resoluciones.

A mayor abundamiento explica que aun aplicando los topes del decreto 814/01 su mandante habría efectuado las liquidaciones en forma correcta respecto a las contribuciones liquidadas si se actualiza el monto originario previsto en \$48.000.000, por el coeficiente de variación salarial. Al efecto acompaña un cuadro conteniendo las mencionadas actualizaciones (ver memorial de agravios).

Por otra parte refiere que muchos contribuyentes amparados por lo que surgía de los considerandos del decreto 1009/01 interpretaron que el monto de \$48.000.000 fue fijado al solo efecto de equiparar el sector servicio y el sector comercio otorgándole un tratamiento unificado que la Resolución N°24 de AFIP no brindaba.

Planteada así la cuestión se entendió que en realidad el Poder Ejecutivo adoptó el mayor de ellos (límite de \$48.000.000) es decir el de comercio por lo que las sucesivas actualizaciones del monto que realizó la Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa (SEPyME) para ese sector resultan también aplicables para los empleadores que se dedican a prestar servicios.

No advierto que la impugnación formulada resulte viable.

Sobre el tema ya he fijado mi posición como vocal preopinante en la sentencia definitiva 150.132 del 19 de febrero de 2013 recaída en los autos “Granja Dos Cuñados SA c/AFIP” que he reiterado al votar la causa “Arpenta Cambios SA c/AFIP” sent. del 17/03/17.

En efecto, la ley 24.476 creó un régimen jurídico especial tendiente a promover el crecimiento y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, considerando como tales a aquellas cuyo plantel no supere los cuarenta trabajadores y tengan una facturación anual inferior a la cantidad que para cada actividad fije un organismo administrativo -Comisión

Fecha de firma: 08/05/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#36049073#331168816#20230505124950649



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

Especial de Seguimiento- que sería el encargado de evaluar el impacto que, sobre las relaciones de trabajo, tuviera la creación de un régimen laboral especial en la materia (arts.83 y 105, ley citada).

De lo expuesto surge que la noción de pequeña y mediana empresa es fluctuante al menos en materia económica pues, aunque la empresa no llegue a superar los cuarenta trabajadores bien podría ser considerada una gran empresa cuando su facturación anual supere cierto monto, lo que revelaría su potencialidad económica.

Con posterioridad se sancionó la ley 25.300 -ley de fomento para la micro, pequeña y mediana empresa- cuyo objetivo sería el fortalecimiento competitivo de dichas entidades aclarándose que la autoridad de aplicación será la que definirá las características de las empresas para ser tipificadas como: micro, pequeña o mediana aclarando que, entre sus tareas está la de revisar anualmente la definición de micro pequeña y mediana empresa a fin de actualizar las parámetros y especificidades contempladas en la definición adoptada (ver art. 1º, ley citada) que no sería otra que la establecida por el art. 83 de la ley 24.467.

En cumplimiento de los fines establecidos por la ley 24.467 se dictó el decreto 943/97 que creó la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa como autoridad de aplicación de la ley 24.467 y es, dicha autoridad, la que determinó que empresas serían consideradas micro, pequeñas o medianas tomando como referencia que las ventas totales anuales no superaran ciertos valores que eran diferenciados según se trate de empresas de construcción, servicios, comercio, industria y minería y agropecuario.

El art. 2º del Decreto 814/2001 establece una alícuota del 21% para los empleadores cuya actividad principal sea la locación y/o prestación de servicios con excepción de los comprendidos en las leyes 23.551, 23.660, 23.661 y 24.467 y uno sustancialmente menor para los restantes empleadores no comprendidos en el inciso anterior, esto es los empleadores considerados titulares de una pequeña o mediana empresa, siendo dicha resolución afectada por la sanción de la ley 25.453 que redujo la alícuota al 20%.

Cabe destacar que las anteriores directivas no tienen un carácter absoluto pues por la propia ley 25.414 que declaró la emergencia pública se facultó al Poder Ejecutivo a eliminar exenciones en materia fiscal y/o contributiva y por ello se dictó el decreto 1.009/2001 estableciendo que las pequeñas y medianas empresas estarían comprendidas en los términos del art. 2º inciso a) del decreto 814/2001 en la medida que sus ventas totales anuales superen los 48.000.000 millones de pesos que es, precisamente, lo que sucede con el apelante.

Como ya expresara la definición de pequeña y mediana empresa es mutable en nuestro ordenamiento jurídico y la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa tiene facultades para

Fecha de firma: 08/05/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#36049073#331168816#20230505124950649



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

tipificar que entidades productivas entran en dicha tipología o no, exclusivamente a los fines laborales (art. 83 ley 24.467) pero no fiscales y/o contributivos, debiendo prevalecer directivas como las derivadas de la ley 25.414 que es un cuerpo normativo de emergencia pública.

Ahora bien, el artículo 1° del Decreto 1009/01 dispone que a los efectos de lo establecido en el artículo 2° del decreto 814/01 resultan comprendidos en el inciso a) de la referida norma, aquellos empleadores cuya actividad principal encuadre en el sector “Servicios” o en el sector “Comercio” de acuerdo con lo dispuesto en la resolución de la ex Secretaria de la Pequeña y Mediana Empresa N°24 del 15/02/2001 siempre que sus ventas totales anuales, calculadas en función de lo previsto en la citada resolución superen en todos los casos los 48.000.000.

La inclusión en el inciso a) del artículo 2° de la Resolución 24/01 de los empleadores cuya actividad principal encuadre en el sector comercio conjuntamente con aquellos cuya actividad principal sea la locación y prestación de servicios respondió a lo que se entendió una necesidad de otorgar un tratamiento unificado a ambos sectores (párrafo tercero del considerando del decreto 1009/01).

Cabe advertir que en el párrafo citado al añadirse la frase “a estos efectos” queda aclaro que el tratamiento unificado de las actividades comerciales y las de locación y prestación de servicios se refiere exclusivamente a los fines previsionales plasmados en el decreto 814/01. Además, al disponerse en el artículo 1° del Decreto 1009/01 que las actividades comerciales y las de servicios quedan alcanzadas por el inciso a) del artículo 2° del decreto 814/01 siempre que sus ventas totales anuales calculadas en función de lo previsto en la Resolución N°24/01 superen en todos los casos los \$48.000.000 se reconoce un único monto de ventas totales anuales aplicables a ambas actividades.

En otras palabras, el Decreto 1009/01 dispuso un tratamiento unificado, en materia de contribuciones patronales, a los dos tipos de emprendimientos, y estableció para ello un monto máximo de ventas totales anuales común a los dos rubros (comercio y servicio). Superado dicho limite el empleador deberá aplicar la alícuota mayor que prevé el inciso a) del artículo 2° del Decreto 814/2001.

Por otra parte, también cuestiona la impugnante la imposición de la multa que se le reclama. Solicita se la exima de su pago, pues según entiende, para la aplicación de una multa es necesario que se acredite el acontecimiento de un hecho antijurídico y culpable, extremo que en el caso no aconteció. Es más, según refiere, su conducta no puede ser tachada ni de culpable ni negligente dado que su parte efectuó el cálculo de las contribuciones patronales





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 2

conforme lo indica la normativa que entiende aplicable, ingresándolas en su totalidad en tiempo y forma.

No puedo compartir tal aseveración dado que en lo atinente al cumplimiento de las exigencias de seguridad social el mero incumplimiento genera la consiguiente responsabilidad y sanción sin que tenga cabida el elemento subjetivo (ver esta Sala sent. del 19/10/98 “Pilot Pen SA”), y no encuentro en la causa elementos suficientes que justifiquen apartarme de la decisión administrativa que se recurre.

Por último y con relación a los honorarios, teniendo en cuenta la calidad de la labor realizada, la facultad que otorga al magistrado el artículo 1.255 del C.C. y Ccial de la Nación, se establecen los honorarios de representación letrada de la parte de la parte actora en 10 UMA (\$149.330). Con respecto a la representación letrada de la parte demandada, se fijan sus honorarios en 15 UMA (\$223.995), conf. CSJN. Ac. 09/2023.

En definitiva, propongo declarar habilitada la presente instancia judicial, confirmar la resolución recurrida, imponer las costas a la vencida (art. 68 CPCCN), regular los honorarios de representación letrada de la parte actora en 10 UMA (\$ 149.330). Con respecto a los correspondientes a la representación letrada de la parte demandada, se establecen los mismos en 15 UMA (\$223.995), conf. CSJN Ac. 09/2023.

En mérito de lo que resulta del acuerdo mayoritario, el Tribunal **RESUELVE**: 1) Revocar la resolución impugnada con el alcance indicado, 2) Imponer las costas en el orden causado. 3) Regular los honorarios de la dirección letrada de la parte actora en 250 UMA, equivalente a \$ 3.733.250 (valor UMA \$ 14.933 conf. Acordada 9/2023) importe al que se adicionará el IVA en caso de corresponder. (cfr. Excma. C.S.J.N. en el fallo, “Compañía General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación” sent. del 16.06.03, Fallos 316:1533). Con respecto a los honorarios correspondientes a la dirección letrada de la parte demandada deberá estarse a lo dispuesto en el artículo 2º de la ley 27.423.

Regístrese, protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase.

NORA CARMEN DORADO

Juez de Cámara

WALTER FABIAN CARNOTA

Juez de Cámara Subrogante

JUAN FANTINI ALBARENQUE

Juez de Cámara

ANTE MÍ: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI

Secretaria de Cámara

Fecha de firma: 08/05/2023

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA CARMEN DORADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: WALTER FABIAN CARNOTA, JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE

Firmado por: JUAN A FANTINI ALBARENQUE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI, SECRETARIA DE CAMARA



#36049073#331168816#20230505124950649